

DECLARACION PS SOBRE EMPRESAS SANITARIAS

Santiago, 28 de enero de 1995

La Comisión Política del Partido Socialista de Chile, ante el debate que se ha producido acerca del destino de las empresas sanitarias, unánimemente declara:

1. Su desacuerdo a la idea de privatizar las empresas de servicios sanitarios, por constituir un sector que presta servicios esenciales para la comunidad y revestir el carácter de un monopolio natural, imposible de operar en un mercado competitivo. Al Estado le corresponde responsabilidades sociales insoslayables en este campo: la salud de la población y la protección del medio ambiente.
A los juicios señalados debe agregarse el peligro de una excesiva concentración del poder en pocas manos privadas, lo que atentaría contra los equilibrios socioeconómicos que deben ser preservados en un régimen democrático, como lo subraya el Programa de la Concertación.
2. Uno de los argumentos esgrimidos para la privatización de dichas empresas es la necesidad de garantizar su eficiencia. Reconociendo que se puede y debe mejorar la gestión a fin de servir mejor la comunidad, es también evidente que los Servicios Sanitarios Públicos han sido capaces de otorgarle al país una cobertura urbana, a nivel nacional, de 97,5% en agua potable, 86% en alcantarillado e, inclusive, han empezado a tratar las aguas servidas en importante medida. Más aún, han extendido el servicio de agua potable hasta casi el 75% de las zonas rurales concentradas.
3. El otro argumento planteado dice relación con las millonarias inversiones que deberán realizarse a fin de cumplir con las metas sanitarias para los años 2000 y 2005. A este respecto, cabe señalar que las inversiones en obras sanitarias se han más que triplicado en los últimos 4 años; se han mejorado los índices operacionales; se han elevado las utilidades y el resultado financiero de las empresas sanitarias arroja a diciembre de 1994, una cifra superior a los 45 mil millones de pesos, con una tasa de rentabilidad promedio del 7% sobre su patrimonio. Más aún, se han destinado 2/3 de sus recursos al tratamiento de aguas servidas y, según el cronograma de inversiones hasta el año 2020, se destinarán cuantiosos medios al mismo propósito. Sobre este punto, el Partido Socialista estima que con sólo el 13% de sus ingresos por recaudación
- tarifaria anual, CORFO puede lograr el 100% de las coberturas domiciliarias de agua potable y alcantarillado, el año 2000. Además, el monto agregado de inversiones requeridas es del orden de 1300 millones de dólares, y no más de 2000 millones de dólares, como fue calculado oficialmente en la discusión sobre la materia. En todo caso, el Partido Socialista está abierto a considerar diversas alternativas de financiamiento para los planes trazados en esta materia por el Presidente de la República, como la concesión del tratamiento de aguas servidas al sector privado, hasta formas de endeudamientos de las propias empresas, de manera que el fisco no asuma directamente ningún compromiso financiero.
4. El Partido Socialista reafirma que toda política en el área de las empresas sanitarias debe resguardar como un bien público los derechos de agua, fortalecer la mayor capacidad regulatoria del Estado, impedir la gestación de negocios relacionados y, por sobre todo, resguardar las tarifas y aumentar los subsidios, a fin de no afectar a los más pobres en sus ya modestos ingresos. Además, es preocupante que una medida privatizadora podría obstaculizar los planes habitacionales, en razón de favorecer proyectos inmobiliarios para sectores de altos ingresos.
5. El Estado tiene el rol de garante del interés general. Cuenta con un sector de empresas rentables que no constituyen carga para el erario fiscal. Privatizarlas sería otorgarle un gran negocio a los privados en perjuicio del patrimonio nacional y la comunidad entera. Basta indicar que sólo en los próximos 25 años, el sector sanitario proyecta recibir ingresos totales por agua potable y alcantarillado, ascendentes en más de tres veces al total de inversiones exigidas.
6. Por último, el Partido Socialista espera abrir un proceso de activa interlocución con las diversas autoridades y actores sociales involucrados con este tema, con el propósito de lograr un amplio consenso que permita modernizar sin privatizar las empresas sanitarias.